

ALBERTO CARDENAS D. -*ABOGADOS-*
Especialistas en Derecho Laboral y
Seguridad Social Integral

Av. Calle 19 No 3 – 50 Oficina 2202 Edificio Barichara Tel. 3375605 / 3520788 – Bogotá D.C.

FACTORES SALARIALES

LMLF

Señor:
JUEZ CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE BUGA (REPARTO)
E. S. D.

Ref. :	NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Demandante:	GLORIA MERCEDES BOTERO ZULUAGA C. C. 31186063
Demandado:	LA NACIÓN – MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL- FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO - SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE TULUÁ.
Acto administrativo que reconoció:	RESOLUCIÓN No. 679 DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2007
Status Jurídico de Pensionado:	14 DE NOVIEMBRE DE 2006
Actuación Administrativa:	07 DE JULIO DE 2016
Acto administrativo Demandar:	ACTO FICTO PRESUNTO NEGATIVO DE PETICIÓN RADICADA CON FECHA 07 DE JULIO DE 2016
Factores Salariales:	ASIGNACIÓN BÁSICA, PRIMA DE SERVICIOS, PRIMA DE VACACIONES, PRIMA DE NAVIDAD

ALBERTO CÁRDENAS D. mayor de edad, residenciado y domiciliado en la ciudad de Bogotá, identificado civilmente con la cédula de ciudadanía número 11.299.893 de Girardot, y profesionalmente con Tarjeta No. 50.746 del Consejo Superior de la Judicatura, actuando en nombre y representación del poderdante que consagra la referencia, de las condiciones civiles expresadas en el poder legalmente otorgado para el efecto, a ustedes con todo respeto me permito manifestar que formulo demanda contra la **NACIÓN- MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL - FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO , y LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE TULUÁ** persona jurídica de Derecho Público, representada legalmente por la señor (a) Ministro de Educación Nacional o por quien haga sus veces, o por el apoderado especial que para el efecto se designe, a fin de que en ejercicio de la Acción de Nulidad y Restablecimiento del Derecho, de que tratan los artículos 137 y 138 de la ley 1437 de 2011, en sentencia definitiva se pronuncie favorablemente sobre las siguientes:

I. PRETENSIONES

PRIMERO. Que se declare la **EXISTENCIA** del **ACTO FICTO PRESUNTO NEGATIVO DE PETICIÓN RADICADA CON FECHA 07 DE JULIO DE 2016**, proferido por la Nación- Ministerio de Educación Nacional- Fondo Nacional de Prestaciones del Magisterio- **SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE TULUÁ**, mediante la cual infiere que se resuelve en forma negativa la solicitud de revisión de la **PENSIÓN VITALICIA DE JUBILACIÓN** a mi poderdante, respecto de la inclusión de la totalidad de los factores salariales devengados en el año inmediatamente anterior a la fecha de adquisición del status jurídico, esto es **14 DE NOVIEMBRE DE 2006** según Resolución No. 679 del 24 de septiembre de 2007.

SEGUNDO.- En virtud de la anterior, se declare la **NULIDAD ABSOLUTA** del **ACTO FICTO PRESUNTO NEGATIVO DE PETICIÓN RADICADA CON FECHA 07 DE JULIO DE 2016**, proferido por la Nación- Ministerio de Educación Nacional- Fondo Nacional de Prestaciones del Magisterio- **SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE TULUÁ**.

TERCERO.- Como consecuencia de estas declaraciones Condenar a la **NACIÓN- MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL-FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO- SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE TULUÁ**, a reconocer y pagar la reliquidación de la pensión vitalicia de jubilación a la demandante citada en la referencia, a partir del **14 DE NOVIEMBRE DE 2006**, fecha en que adquirió el status jurídico, **teniendo en cuenta todos los factores salariales devengados por mi prohijada durante el año inmediatamente anterior al mismo.**

CUARTO. Que como consecuencia de la declaración de nulidad se ordene, como restablecimiento del derecho, la reliquidación de la pensión vitalicia de Jubilación de mi mandante, teniendo en cuenta los factores salariales

ALBERTO CARDENAS D. -ABOGADOS-
*Especialistas en Derecho Laboral y
Seguridad Social Integral*

Av. Calle 19 No 3 – 50 Oficina 2202 Edificio Barichara Tel. 3375605 / 3520788 – Bogotá D.C.

FACTORES SALARIALES

devengados durante el año inmediatamente anterior a la fecha del status jurídico, a saber: **ASIGNACIÓN BÁSICA, PRIMA DE SERVICIOS, PRIMA DE VACACIONES, PRIMA DE NAVIDAD.**

QUINTO. CONDENAR a la entidad demandada a efectuar los reajustes pensionales establecidos en la ley 71 DE 1988, que se causen con posterioridad al año 2006.

SEXTO. CONDENAR a la demandada a RECONOCER Y PAGAR a favor de la demandante, el valor de las mesadas pensionales que se causen por la reliquidación de la pensión mensual vitalicia de jubilación y los respectivos reajustes.

SÉPTIMO: CONDENAR a la demandada al pago de la INDEXACIÓN ordenando la actualización del valor que resulte por mesadas pensionales atrasadas, como consecuencia de la condena, aplicando para tal fin, la variación del Índice de Precios al Consumidor certificado por el D.A.N.E.

OCTAVO: CONDENAR a la demandada a que si no da cumplimiento al fallo dentro del término previsto en el artículo 195 numeral 4 de la Ley 1437 de 2011, realice el pago con el interés moratorio a la tasa comercial.

NOVENO: Que se condene a la parte demandada al cumplimiento del fallo que como resultado se profiera en el presente proceso, de acuerdo con lo establecido en los artículos 192 y 195 de la ley 1437 de 2011, e igualmente reconozca los intereses a partir de la ejecutoria de la respectiva sentencia, tal como lo establece el artículo 192 ibídem.

DÉCIMO: Que se condene a la parte demandada en costas y gastos del proceso en los términos del Art. 188 de la Ley 1437 de 2011.

II. HECHOS

PRIMERO.- La señora GLORIA MERCEDES BOTERO ZULUAGA, identificada con la Cédula de Ciudadanía No. 31186063 es pensionada por LA NACIÓN- FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO - SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE TULUÁ, mediante Resolución No. 679 DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2007, en cuantía de \$1444872 M/cte mensuales.

SEGUNDO.- Mediante escrito radicado 07 DE JULIO DE 2016, mi poderdante solicitó la revisión de la 679 DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2007 para que le fueran incluidos la totalidad de los factores salariales devengados en el año inmediatamente anterior a la fecha en que adquirió el status jurídico, esto es partir del 11 DE AGOSTO DE 2006.

TERCERO.- Con el ACTO FICTO PRESUNTO NEGATIVO DE PETICIÓN RADICADA CON FECHA 07 DE JULIO DE 2016, LA NACIÓN –MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL- FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO- SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE TULUÁ, resuelve la solicitud de inclusión de la totalidad de los factores salariales devengados por mi poderdante, en el año inmediatamente anterior a la fecha del status de jubilado, del cual se infiere la **negación el derecho pretendido.**

CUARTO.- El demandado, al momento de determinar la cuantía de la pensión de jubilación de mi prohijada en la Resolución de reconocimiento, incluyó algunos factores, desestimando que en realidad son: La **ASIGNACIÓN BÁSICA, PRIMA DE SERVICIOS, PRIMA DE VACACIONES, PRIMA DE NAVIDAD** y los demás factores salariales devengados y certificados durante el año inmediatamente anterior a la fecha en que adquirió el status de jubilada.

QUINTO.- LA NACIÓN- MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL-FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO- SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE TULUÁ, al no tener en cuenta los factores salariales, que por ley deben ser computados, determinó una cuantía menor a la que realmente le corresponde.

ALBERTO CARDENAS D. -ABOGADOS-
*Especialistas en Derecho Laboral y
 Seguridad Social Integral*

Av. Calle 19 No 3 – 50 Oficina 2202 Edificio Barichara Tel. 3375605 / 3520788 – Bogotá D.C.

FACTORES SALARIALES

SEXTO.- LA NACIÓN-MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL-FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO-SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL TULUÁ, al ordenar el reconocimiento y pago de la pensión de jubilación a la demandante de la referencia, no actualizó la base de la liquidación de la prestación reconocida a mi poderdante de acuerdo con el índice de precios al consumidor, lo que determinó una mesada pensional menor a la que realmente le corresponde.

III. NORMAS VIOLADAS

Art. 13, 46, 48 y 53 de la Constitución Política de Colombia; Art. 81 Ley 812 de 2003, Art 115 de la Ley 115 de 1994, que aclaró el régimen prestacional de los educadores estatales es el establecido en la ley 91 de 1989, y en la ley 60 de 1993, disposición que debe entenderse modificada y hoy derogada por la ley 715 de 2001. Decretos 3135 de 1968, 1848 de 1969 y 1045 de 1978. Art 15, Ley 91 de 1989, Arts. 16, 102, Ley 5 de 1969 art. 2, y Art. 16, 102 y ss de la ley 1437 de 2011.

IV. CONCEPTO DE LA VIOLACIÓN.

RESPECTO A LA CONSTITUCIÓN NACIONAL:

El Artículo 13 de la constitución Nacional, establece el principio de la igualdad, pero no como un parámetro formal o como un desgastado postulado que pretenda un impropio igualitarismo. Sino como la igualdad real y efectiva de oportunidades que invoca una misma protección y trato de las autoridades, sin que permita ninguna discriminación. De esa igualdad de oportunidades fue excluida mi mandante con los Actos Administrativos demandados, en los que se le negó el Derecho a la corrección de la liquidación de la pensión de Jubilación por inclusión de la totalidad de los factores salariales devengados por él en el año inmediatamente anterior a la adquisición del status de pensionado, trato discriminatorio si se observa que a otros docentes ello les fue efectivamente reconocido y hoy por hoy gozan de una Pensión de Jubilación liquidada conforme a la ley.

Es de recalcar que ya que la igualdad no solo es un principio orientador del ordenamiento jurídico colombiano, sino que es un derecho fundamental que nos asiste, todos los colombianos somos iguales ante la ley, en razón de lo cual debemos recibir de parte de las distintas autoridades un trato igual cuando las situaciones fácticas también son similares. En este caso en particular, éste Derecho le está siendo quebrantado a mi poderdante, toda vez que para citar solo un caso, mediante la Resolución No. 00754 del 21 de Diciembre de 2004, al Sr. HUBERT DE JESÚS CASTAÑO NARANJO, quien se encontraba en una situación igual a la de mi poderdante, se le dio aplicación a la ley 812 de 2003, y se le *reconoce y ordena el pago de una reliquidación de la pensión de jubilación* incluyendo para tal fin, los factores salariales devengados por el susodicho en el año inmediatamente anterior al cual cumplió con los requisitos de ley tendientes a la adquisición del derecho a la pensión en comento.

Y por último vemos que de una lectura integradora de los Artículos 46, 48 y 53 de la CN se desprende la garantía, protección, dirección, coordinación, control de la Seguridad Social establecida como un derecho irredimible y una obligación del Estado. Es así como la Seguridad Social conduce a la prestación de asistencia y protección, elemento de un Estado Social de Derecho que debe establecer una forma de organización política que conlleve la construcción de unas condiciones indispensables que permitan a todos los habitantes de nuestro territorio, una vida digna y un mínimo de situaciones para seguridad material. En el caso particular del Derecho a la Pensión de Jubilación a la que tenemos Derecho los colombianos, previo el cumplimiento de los parámetros legales vemos como en el caso *sub examine*, se está negando tal derecho pese a que se dio cumplimiento a los requisitos establecidos por la ley, bajo el argumento de que la ley aplicable es otra.

VIOLACIÓN A LA LEY:

La violación a la ley se ha dado bajo varios aspectos que se señalan a continuación:

1. Frente al régimen prestacional que corresponde a los docentes tanto nacionales como nacionalizados y territoriales: (Artículo 81 de la Ley 812 de 2003)

Tal y como se indicaba en el numeral anterior, el Acto Legislativo 01 de 2005 dijo que

ALBERTO CARDENAS D. -ABOGADOS-
*Especialistas en Derecho Laboral y
 Seguridad Social Integral*

Av. Calle 19 No 3 – 50 Oficina 2202 Edificio Barichara Tel. 3375605 / 3520788 – Bogotá D.C.

FACTORES SALARIALES

“El régimen pensional de los docentes nacionales, nacionalizados y territoriales, vinculados al servicio público educativo oficial es el establecido para el Magisterio en las disposiciones legales vigentes con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003, y lo preceptuado en el artículo 81 de esta. Los docentes que se hayan vinculado o se vinculen a partir de la vigencia de la citada ley, tendrán los derechos de prima media establecidos en las leyes del Sistema General de Pensiones, en los términos del artículo 81 de la Ley 812 de 2003”.

El Artículo 81 de la ley 812 de 2003 al que se refiere el Acto Administrativo en comento, al respecto establece que:

“El régimen prestacional de los docentes nacionales, nacionalizados y territoriales, que se encuentren vinculados al servicio público educativo oficial, es el establecido para el Magisterio en las disposiciones vigentes con anterioridad a la entrada en vigencia de la presente ley.”(Negrillas, subrayas y cursivas fuera del texto original)

Los docentes que se vinculen a partir de la entrada en vigencia de la presente ley, serán afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y tendrán los derechos pensionales del régimen pensional de prima media establecido en las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, con los requisitos previstos en él, con excepción de la edad de pensión de vejez que será de 57 años para hombres y mujeres. (...)”

La lectura de las normas citadas conlleva a afirmar que a aquellos docentes que se vincularon antes de la entrada en vigencia de la ley 812 de 2003 debe aplicárseles el régimen pensional establecido para el magisterio, es decir ley 91 de 1989 y demás referidas y que para quienes se vinculen después de la entrada en vigencia de la referida ley, será aplicable el régimen de prima media de la ley 100 de 1993 y 797 de 2003, por tanto con la emisión del acto administrativo en comento, se pasa por alto el régimen especial que le asiste a mi poderdante.

Es claro que la norma constitucional (acto legislativo 001 de 2005) expresó que para quienes se vincularon antes de la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003, se aplicarían las normas anteriores pertinentes al régimen del magisterio, luego, no es aplicable el decreto señalado, si no para los docentes vinculados con posterioridad a la fecha señalada y no como se indica en el acto administrativo demandado, en donde se establece que el Decreto 3752 es la “norma vigente para la liquidación de las pensiones causadas a partir del 23 de Diciembre de 2003”.

2. Falta de inclusión de los factores salariales devengados en la liquidación de la Pensión de Jubilación:

EL Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio ha reiterado como directriz a seguir, que el Decreto 2341 de 2003, que no trata del tema, si no de la base de cotización para los servidores públicos que expresamente se enumeran en el Art. 1 del decreto 691 de 1994, señala que el ingreso base de liquidación de los docentes afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones del Magisterio, será el establecido en el decreto 1158 de 1994, lo cual tampoco corresponde con Derecho, toda vez que el Decreto 1158 de 1994 no es aplicable a los docentes por estar estos cobijados por un régimen especial y expresamente exceptuados del Régimen Pensional de la ley 100 de 1993.

De la misma manera, ha afirmado que el Decreto 1158 de 1994 supuestamente establece que: (...) *unos factores base de cotización, de los cuales para el caso de los docentes aplican únicamente la asignación básica y las horas extras.*” De ninguna manera se desprende del texto del comentado la interpretación dada.

El Concepto de salario fue establecido mediante la Ley 5 de 1969 art. 2: “(...) *se entiende por asignación actual el promedio de TODO lo devengado por un trabajador en servicio activo a título de salario o retribución de servicios tales como horas extras, primas kilométricas, dominicales, feriados, bonificaciones etc., (...).*”

Normatividad de la que se colige el concepto de salario como aquellas sumas percibidas por el trabajador de manera periódica y habitual como retribución o pago del servicio que presta, por tanto a mi poderdante, se le ha vulnerado la posibilidad de adquirir su pensión con la totalidad de los factores salariales devengados.

3. Normatividad Aplicable a los docentes vinculados antes del 22 de Diciembre de 2003:

El régimen aplicable a los docentes vinculados antes del 23 de Diciembre de 2003, el definido por la ley 115 de 1994. Tal disposición señala las normas generales para regular el Servicio Público de la Educación y frente al asunto *sub examine* de la presente acción indica en su artículo 115:

ALBERTO CARDENAS D. -*ABOGADOS-*
Especialistas en Derecho Laboral y
Seguridad Social Integral

Av. Calle 19 No 3 – 50 Oficina 2202 Edificio Barichara Tel. 3375605 / 3520788 – Bogotá D.C.

FACTORES SALARIALES

Régimen especial de los educadores estatales. El ejercicio de la profesión docente estatal se regirá por las normas del régimen especial del Estatuto Docente y por la presente Ley. El régimen prestacional de los educadores estatales es el establecido en la Ley 91 de 1989, en la Ley 60 de 1993 y en la presente ley. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 53 de la Constitución Política, el estado garantiza el derecho al pago oportuno y al reajuste periódico de las pensiones y salarios legales.

En ningún caso se podrán desmejorar los salarios y prestaciones sociales de los educadores.

Y por su parte, en lo pertinente, la ley 91 de 1989 reza:

Art. 15 A partir de la vigencia de la presente Ley el personal docente nacional y nacionalizado y el que se vincule con posterioridad al 1. de enero de 1990 será regido por las siguientes disposiciones:

(...) 2. Pensiones: B. Para los docentes **vinculados a partir del 1. de enero de 1981**, nacionales y nacionalizados, y para aquellos que se nombren a partir del 1o. de enero de 1990, cuando se cumplan los requisitos de ley, se reconocerá **sólo** una pensión de jubilación equivalente al 75% del salario mensual promedio del último año. Estos pensionados gozarán **del régimen vigente para los pensionados del sector público nacional** y adicionalmente de una prima de medio año equivalente a una mesada pensional.

Se puede concluir entonces, que el artículo 115 de la ley 115 de 1994, aclaró que el régimen prestacional de los educadores estatales es el establecido en la ley 91 de 1989, y en la ley 60 de 1993, disposición que debe entenderse modificada y hoy derogada por la ley 715 de 2001(sistema general de participaciones)

La normatividad aplicable entonces a los docentes vinculados antes de la entrada en vigencia de la ley 812 ya varias veces referida, se basa en los Decretos **3135 de 1968, 1848 de 1969 y 1045 de 1978** y para los docentes vinculados a partir del 1 de enero de 1981, nacionales o nacionalizados, y aquellos que se nombren a partir del 1 de enero de 1990, se debe reconocer una pensión de jubilación equivalente al 75% del salario mensual promedio del año inmediatamente anterior a la adquisición del status de pensionado, quienes “gozarán del régimen vigente para los pensionados del sector público nacional y adicionalmente de una prima de medio año”.

4. Violación del Artículo 15 de la ley 91 de 1989 por parte del Acto Administrativo demandado:

Por otra parte, se tiene que los actos administrativos demandados **violan el artículo 15 de ley 91 de 1989**, dicho artículo dispuso:

“.. A partir de la vigencia de la presente ley el personal docente nacional y nacionalizado y el que se vincule con posterioridad al 1 de enero de 1990, será regido por las siguientes disposiciones:

1. Los docentes nacionalizados que figuren vinculados hasta el 31 de diciembre de 1989, para efectos de las prestaciones económicas y sociales, mantendrán el régimen prestacional que han venido gozando en cada entidad territorial, de conformidad con las normas vigentes.

Los docentes nacionales y los que se vinculen a partir del 1 de enero de 1990, para efecto de las prestaciones económicas y sociales se regirán por la normas vigentes aplicables a los empleados públicos de orden nacional, decretos 3135 de 1968, 1848 de 1969 y **1045 de 1978 o que se expidan en el futuro, con las excepciones consagradas en esta ley...**” (Negrilla fuera del texto original).

De lo anterior se concluye que el régimen prestacional del que venían gozando los docentes vinculados al FONDO PRESTACIONAL DEL MAGISTERIO, se mantuvo tal y como lo consagró el Art. 81 de ley 812 de 2003, con lo queda demostrado que los actos administrativos demandados igualmente violan el contenido del Art. 15 de ley 91 de 1989.

Al respecto se tiene que el GOBIERNO NACIONAL estableció que el régimen salarial de los docentes vinculados para la fecha de expedición de la ley 812 de 2003, sería el establecido para el Magisterio en las disposiciones vigentes a tal fecha, sin agregar más al respecto.

ALBERTO CARDENAS D. -ABOGADOS-
*Especialistas en Derecho Laboral y
 Seguridad Social Integral*

Av. Calle 19 No 3 – 50 Oficina 2202 Edificio Barichara Tel. 3375605 / 3520788 – Bogotá D.C.

FACTORES SALARIALES

La violación se da cuando la Entidad entra a aplicar el artículo 3º del Decreto 3752 de 2003 de manera exegética, contraviniendo y obviando los lineamiento específicos dados por la ley 812 de 2003 y es por falta de aplicación de éste mandato legal, impuesto por la normatividad antes señalada que - LA NACIÓN -FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO - **SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE TULUÁ**, quebrantó con los Actos Administrativos demandados, el ordenamiento legal existente en torno a la pensión de jubilación al negándole este derecho a mi mandante.

5. De la inaplicación de la Ley 54 de 1962 que aprobó la aplicación del Convenio 98 de la Organización Internacional de Trabajo.

El art. 1 de la Ley 54 de 1962 reza:

“a los efectos del presente Convenio, el término “salario” significa la remuneración o ganancia sea cual fuere su denominación o método de cálculo siempre que pueda evaluarse en efectivo, fijada por acuerdo o por la legislación nacional, y debida por un empleador a un trabajador en virtud de un contrato de trabajo, escrito o verbal, por el trabajo que este último haya efectuado o deba efectuar o por servicios que haya prestado o deba prestar”

6. Vulneración art. 20 y 10 de la Ley 1437 de 2011

El artículo 20 es claro en establecer la atención prioritaria que deben tener las peticiones relacionadas con derechos fundamentales, en este caso se trata de la obtención de un derecho que le asiste a personas de la tercera edad y que deben tener una atención privilegiada.

Por su parte, el artículo 10 establece la obligatoriedad de las entidades públicas de acatar el precedente jurisprudencial emitido por las altas cortes y aunque existe una amplia línea jurisprudencial que indica que para el reconocimiento de la pensión de los docentes se debe incluir la totalidad de los factores salariales devengados las entidades hacen caso omiso y vulneran así el derecho que le asiste a mi poderdante.

V. ANÁLISIS JURISPRUDENCIAL

1. Respecto a la no aplicación a las normas aplicables al régimen de los docentes, se tiene lo dicho por la H. Corte Constitucional en su Sentencia C 506 de 2006. MP Clara Inés Vargas:

*“(…)debe precisar la Corte que si bien se han presentado algunas modificaciones al régimen prestacional de los docentes oficiales, en efecto, se han expedido i) la **Ley 812 de 2003**, referida al Plan Nacional de Desarrollo 2003-2006, que en el artículo 81, alude al régimen prestacional de los docentes oficiales^{17]} y ii) el **Acto Legislativo 01 de 2005**, que adicionó algunos incisos y párrafos del artículo 48 de la Constitución, estableciendo el régimen pensional de los docentes que les será aplicable; las normas acusadas continúan produciendo efectos jurídicos según lo dispuesto en la nueva regulación cuando señala que el régimen prestacional de los docentes mencionados es el establecido para el Magisterio en las disposiciones vigentes con anterioridad.” (Subrayas fuera del texto original).*

y más adelante, en la misma providencia, la Corporación, en relación a la normatividad desplegada a partir de la ley 91 de 1989 indica:

“las prestaciones sociales del personal nacional, causadas hasta la fecha de promulgación de la ley, serán reconocidas y pagadas de conformidad con las normas prestacionales del orden nacional, aplicables a dicho personal, y que las prestaciones del personal nacionalizado, causadas hasta la fecha de promulgación de la Ley, se seguirán reconociendo y pagando de conformidad con las normas que regían en cada entidad territorial en el momento de entrar en vigencia la Ley 43 de 1975”.

Lo anterior en explicación de que la justificación que tuvo esta ley estuvo ligada directamente con el objetivo de garantizar plenamente los derechos adquiridos de los docentes y sus expectativas legítimas. Y es tan así que la misma providencia indica:

ALBERTO CARDENAS D. -ABOGADOS-
Especialistas en Derecho Laboral y
Seguridad Social Integral

Av. Calle 19 No 3 – 50 Oficina 2202 Edificio Barichara Tel. 3375605 / 3520788 – Bogotá D.C.

FACTORES SALARIALES

“... al crearse el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, para atender las prestaciones sociales de los docentes nacionales y nacionalizados que se encuentren vinculados a la promulgación de la ley, con observancia de lo dispuesto en el artículo 2, y los que se vinculen con posterioridad a ella, se respetaron los derechos adquiridos o regímenes existentes que le resultaban aplicables al respecto”.

2. Para demostrar que a mi poderdante le asiste el derecho al reconocimiento de la totalidad de los factores salariales, devengados durante el último año de servicio como DOCENTE en la NACIÓN- FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO-SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE TULUÁ, tal y como lo establece la Sentencia proferida por la Sala Plena de la Sección Segunda del Honorable Consejo de Estado, de fecha 4 de Agosto de 2010, Radicado No. 2006-07509-01 (0112-09), en la cual se unifica el criterio de la inclusión de todos los factores devengados en el último año de servicio, con base en los siguientes consideraciones fácticas:

.....” En aras de garantizar los principios de igualdad material, primacía de la realidad sobre las formalidades y favorabilidad en materia laboral, la Sala, previos debates surtidos con apoyo de antecedentes históricos, normativos y jurisprudenciales, a través de la presente sentencia de unificación arriba a la conclusión que la ley 33 de 1985 no indica en forma taxativa los factores salariales que conforman la base de liquidación pensional, sino que los mismos están simplemente enunciados y no impiden la inclusión de otros conceptos devengados por el trabajador durante el último año de prestación de servicios. Esta decisión encuentra consonancia con la sentencia de 9 de julio de 2009, proferida por la Sección Segunda de esta Corporación, que al analizar la interpretación que debía otorgarse al artículo 45 del Decreto 1045 de 1978, norma anterior que enuncia los factores salariales que deben tenerse en cuenta para efectos de liquidar las cesantías y las pensiones, de quienes se les aplica la ley 6 de 1945. De la normatividad anterior a la expedición de la Ley 33 de 1985, tal como ocurre en el caso del artículo 45 del Decreto 1045 de 1978, se observa que los factores salariales que debían tenerse en cuenta para efectos de determinar la cuantía de la pensión de jubilación eran superiores a los ahora enlistados por la primera de las citadas normas, modificada por la Ley 62 de 1985; aún así, también de dicho Decreto se ha predicado que no incluye una lista taxativa sino meramente enunciativa de los factores que componen la base de liquidación pensional, permitiendo incluir otros que también fueron devengados por el trabajador. La Ley 33 de 1985, modificada por la Ley 62 del mismo año, en el sentido de considerar que aquella enlista en forma expresa y taxativa los factores sobre los cuales se calcula el Ingreso Base de Liquidación de la pensión de jubilación, trae como consecuencia la regresividad en los Derechos Sociales de los ciudadanos, pues se observa sin duda alguna que el transcurso del tiempo ha implicado una manifiesta disminución en los beneficios alcanzados con anterioridad en el ámbito del reconocimiento y pago de las pensiones.

El artículo 53 de la Constitución Política, en virtud del cual en caso de duda en la aplicación o interpretación de una o más normas que regulan en forma diferente una misma situación de hecho ha de optarse por aquella que sea más benéfica para el trabajador o sus beneficiarios. Es por ello que la interpretación que debe darse a la ley 33 de 1985, modificada por la ley 62 de la misma anualidad, es la que permite efectivizar en mejor medida los derechos y garantías laborales, es decir aquella según la cual las citadas normas no enlistan en forma taxativa los factores salariales que componen la base de liquidación pensional, sino que permite incluir todos aquellos que fueron devengados por el trabajador, previa deducción de los descuentos por aportes que dejaron de efectuarse.

Atendiendo al principio de la realidad sobre las formalidades, es preciso aclarar que la Sala no desconoce la competencia radicada por la Constitución Política en cabeza del legislador y el ejecutivo respecto de la regulación de las prestaciones sociales de los empleados públicos; sin embargo, dada la redacción de la disposición analizada, a saber, la Ley 33 de 1985 modificada por la Ley 62 del mismo año, y el principio de primacía de la realidad sobre las formalidades, no puede concederse un alcance restrictivo a dicha norma, pues se corre el riesgo de excluir de la base de liquidación pensional factores salariales devengados por el trabajador y que por su naturaleza ameritan ser incluidos para tales efectos, los cuales en el transcurso del tiempo han cambiado su naturaleza, a fin de hacerlos más restrictivos.

Si el querer del legislador consiste en que las pensiones se liquiden tomando como base los factores sobre los cuales se han efectuado aportes a la seguridad social no puede concluirse que, automáticamente, los factores que no han sido objeto de las deducciones de ley deban ser excluidos del ingreso base de liquidación pensional, pues siempre es posible ordenar el descuento que por dicho concepto haya lugar. En este orden de ideas, la protección del erario público es un principio que debe armonizarse con los derechos laborales, a los

ALBERTO CARDENAS D. -ABOGADOS-
Especialistas en Derecho Laboral y
Seguridad Social Integral

Av. Calle 19 No 3 – 50 Oficina 2202 Edificio Barichara Tel. 3375605 / 3520788 – Bogotá D.C.

FACTORES SALARIALES

cuales la Constitución Política les da especial importancia, de esta manera se logra efectivizar ambos mandatos sin necesidad de restringir excesivamente ninguno de ellos, toda vez que, como ha quedado expuesto ambos deben coexistir dentro del Estado Social de Derecho.

Ahora bien, en consonancia con la normatividad vigente y las directrices jurisprudenciales trazadas en torno a la cuantía de las pensiones de los servidores públicos, es válido tener en cuenta todos los factores que constituyen salario, es decir aquellas sumas que percibe el trabajador de manera habitual y periódica, como contraprestación directa por sus servicios, independientemente de la denominación que se les dé, tales como, asignación básica, gastos de representación, prima técnica, dominicales y festivos, horas extras, auxilios de transporte y alimentación, bonificación por servicios prestados, prima de servicios, incrementos por antigüedad, quinquenios, entre otros, solo para señalar algunos factores de salario, a más de aquellos que reciba el empleado y cuya denominación difiera de los enunciados que solo se señalaron a título ilustrativo, pero que se cancelen de manera habitual como retribución directa del servicio.....” (La negrilla es nuestra).

Como corolario de lo descrito se tiene que por no aplicar la normas en forma integral, interpretándola de manera aislada y parcial, la entidad demanda hace que los actos administrativos estén falsamente motivados, por lo que es necesario que se declare la Nulidad del acto demandado, accediendo favorablemente, por parte del señor(a) juez a las súplicas de la demanda.

Al no haberse cancelado a mi poderdante oportunamente el valor de las mesadas pensionales a que tiene derecho con la totalidad de los factores salariales devengados en el año inmediatamente anterior a la fecha de adquisición de su status de pensionado, lo cual acarrea una pérdida en el poder adquisitivo de la moneda por la inflación que viene padeciendo nuestra economía, dando lugar a la indexación, actualizando los valores que se ordenen pagar al demandante como restablecimiento del derecho, mediante la aplicación de los ajustes correspondientes, conforme a la sentencia C-862 de 2006. MP. Humberto Sierra Porto, teniendo en cuenta para tal fin la variación del índice de precios al consumidor certificado por el DANE.

3. Precedente jurisprudencial art 102 ley 1437 de 2011

En Sentencia C 539 de 2011, de la sala plena de la Corte Constitucional, Magistrado Ponente, Luis Ernesto Vargas Silva, la Corte se refirió a la sujeción de las autoridades administrativas a la Constitución y la ley, y la obligación de las autoridades públicas de acatar el precedente judicial dictado por las Altas Cortes.

“La Corte reitera en esta oportunidad que todas las autoridades públicas, de carácter administrativo o judicial, de cualquier orden, nacional, regional o local, se encuentran sometidas a la Constitución y a la ley, y que como parte de esa sujeción, las autoridades administrativas se encuentran obligadas a acatar el precedente judicial dictado por las Altas Cortes de la jurisdicción ordinaria, contencioso administrativa y constitucional.

La anterior afirmación se fundamenta en que la sujeción de las autoridades administrativas a la Constitución y a la ley, y en desarrollo de este mandato, el acatamiento del precedente judicial, constituye un presupuesto esencial del Estado Social y Constitucional de Derecho –art.1 CP-; y un desarrollo de los fines esenciales del Estado, tales como garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución –art.2-; de la jerarquía superior de la Constitución –art.4-; del mandato de sujeción consagrado expresamente en los artículos 6º, 121 y 123 CP; del debido proceso y principio de legalidad –art.29 CP; del derecho a la igualdad –art.13 CP-; del postulado de ceñimiento a la buena fé de las autoridades públicas –art.83 CP-; de los principios de la función administrativa –art. 209 CP-; de la fuerza vinculante del precedente judicial contenida en el artículo 230 superior; así como de la fuerza vinculante del precedente constitucional contenido en el artículo 241 de la Carta Política”.

Ahora bien, sobre los alcances de la sentencia SU-230 de 2015 de la Corte Constitucional, el Honorable Consejo de Estado, mediante providencia de unificación de fecha 25 de Febrero de 2016, Consejero Ponente: Dr. Gerardo Arenas Monsalve, Expediente No. 25000234200020130154101, se manifestó al respecto, e indicó:

La Sala no puede pasar por alto que al momento de resolverse el presente recurso se dio a conocer por parte de la Corte Constitucional el contenido total de la **Sentencia SU- 230 de 2015**, en la cual abordó el tema de régimen de transición y señaló como precedente en materia de ingreso base de liquidación de las pensiones del régimen de transición, lo dicho por esa misma Corte en la sentencia C-258 de 2013. A continuación procede la Sala de la Sección Segunda del Consejo de Estado a fijar su posición con respecto a la referida sentencia de la Corte Constitucional.

ALBERTO CARDENAS D. -ABOGADOS-
*Especialistas en Derecho Laboral y
 Seguridad Social Integral*

Av. Calle 19 No 3 – 50 Oficina 2202 Edificio Barichara Tel. 3375605 / 3520788 – Bogotá D.C.

FACTORES SALARIALES

La sentencia SU-230 de 2015 se produjo como resultado de la acción de tutela interpuesta por un ciudadano contra la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia y el Banco Popular S. A., al estimar vulnerados sus derechos fundamentales por cuanto al liquidar su pensión de jubilación (regida por la Ley 33 de 1985 en virtud del régimen de transición pensional), no se tuvo en cuenta el salario promedio que sirvió de base a los aportes en el último año de servicios, sino que se ordenó liquidarla con base en el promedio de los aportes cotizados durante los últimos 10 años.

Tal como lo destaca la sentencia de la Corte Constitucional, la controversia interpretativa específica estriba en la interpretación del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, el cual al referirse a que las pensiones del régimen de transición deben reconocerse respetando la edad, tiempo y monto del régimen anterior que corresponda al afiliado. Además, el inciso tercero del referido artículo 36 de la Ley 100, dispuso un ingreso base de liquidación de las pensiones de transición, con lo cual el alcance de la expresión “monto” ha originado la importante controversia que ahora mismo se analiza. En esta sentencia SU-230 de 2015, la Corte Constitucional señala que “existe una línea jurisprudencial consolidada de las salas de revisión de tutelas...cuya *ratio decidendi* precisa que se vulneran los derechos pensionales cuando no se aplica en su integridad el régimen especial en que se encuentra amparado el beneficiario del régimen de transición”, y enumera un importante número de sentencias de tutela y de constitucionalidad de esa Corte donde se ha sostenido esa postura, que ha sido la misma que invariablemente ha sostenido el Consejo de Estado respecto de la liquidación de estas pensiones, es decir, donde se afirma que el “monto” equivale al porcentaje y al ingreso base, de modo que las pensiones del régimen de transición se liquidan con el promedio salarial correspondiente por regla general al último año de servicios.

Señala la Corte Constitucional que, pese a lo anterior, debe fijar un nuevo criterio interpretativo, y trae como sustento del mismo que esa Corporación “*en la sentencia C-258 de 2013 fijó el precedente que debe ser aplicado al caso que se estudia, en cuanto a la interpretación otorgada (sic) sobre el monto y el ingreso base de liquidación en el marco del régimen de transición, y por ende, a todos los beneficiarios de regímenes especiales*”.

En esta oportunidad la Sección Segunda del Consejo de Estado considera que la sentencia SU-230 de 2015, dado que tuvo como origen una sentencia de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, que casó el fallo recurrido y ordenó liquidar la pensión con el promedio de los últimos 10 años, lo que hizo fue avalar la interpretación que tradicionalmente ha tenido la Corte Suprema de Justicia sobre el tema, con respecto a las competencias que corresponden a la jurisdicción ordinaria.

Ahora bien, dado que dentro de sus competencias, la jurisdicción de lo contencioso administrativo conoce de los regímenes especiales del sector público en materia pensional, y que a su interior se aplican no uno sino múltiples regímenes normativos especiales de pensiones, en virtud del régimen de transición pensional, la Corte Constitucional ha tenido oportunidad de referirse específicamente a las interpretaciones acerca del monto de las pensiones de transición por parte de esta jurisdicción y las ha considerado ajustadas a la Constitución y a la ley, con excepción de las pensiones del régimen de Congresistas y asimilados al mismo, precisamente en virtud de la sentencia C-258 de 2013.

En efecto, la sentencia C-258 de 2013, proferida para definir la constitucionalidad del artículo 17 de la Ley 4° de 1992, dispuso que en las pensiones cobijadas por el régimen pensional de Congresistas y asimilados a este, por tratarse de un régimen privilegiado, debían tener interpretaciones restrictivas y no amplias, en virtud del principio de sostenibilidad financiera establecido en la Constitución.

Ahora, con la sentencia SU-230 de 2015 se generalizan los criterios de una sentencia cuya motivación se basó en argumentos de desigualdad frente a la generalidad de los afiliados a la seguridad social, y se señala por parte de la Corte Constitucional que la referida sentencia C-258 de 2013 constituye “precedente” para extender la interpretación que allí se dispuso a la generalidad de las pensiones del régimen de transición, siendo que los argumentos de la sentencia de constitucionalidad se limitaban a las normas de la Ley 4° de 1992 y no a la interpretación de múltiples normas jurídicas en que se ha sustentado la liquidación de las pensiones del régimen de transición de los regímenes especiales del sector público. En efecto, señaló expresamente la sentencia C-258 de 2013 sobre el particular:

“En este orden de ideas, el análisis de constitucionalidad que se llevará a cabo en esta providencia se circunscribe al régimen pensional especial previsto en el precepto censurado, el cual es aplicable a los Congresistas y los demás servidores ya señalados. Por tanto, en este fallo no se abordará la constitucionalidad de otros regímenes pensionales especiales o exceptuados, creados y regulados en

ALBERTO CARDENAS D. -ABOGADOS-
*Especialistas en Derecho Laboral y
 Seguridad Social Integral*

Av. Calle 19 No 3 – 50 Oficina 2202 Edificio Barichara Tel. 3375605 / 3520788 – Bogotá D.C.

FACTORES SALARIALES

otras normas, como por ejemplo, los regímenes del Magisterio, de la Rama Ejecutiva, de la Rama Judicial y Ministerio Público, de la Defensoría del Pueblo, del Departamento Administrativo de Seguridad, de la profesiones de alto riesgo, de los aviadores civiles, de los trabajadores oficiales, del Banco de la República, de los servidores de las universidades públicas, de Ecopetrol, del Instituto Nacional Penitenciario, o los dispuestos por convenciones colectivas, entre otros. **En consecuencia, lo que esta Corporación señale en esta decisión no podrá ser trasladado en forma automática a otros regímenes especiales o exceptuados.**” (subrayas originales de la sentencia).

Quiere en esta oportunidad el Consejo de Estado señalar que, de conformidad con lo expuesto y como se expresó con anterioridad en esta providencia, el criterio invariable de esta Corporación, sostenido en forma unánime por más de veinte años, ha sido y es que el monto de las pensiones del régimen de transición pensional del sector oficial comprende la base (generalmente el ingreso salarial del último año de servicios) y el porcentaje dispuesto legalmente (que es por regla general el 75%). La única excepción a este criterio la constituyen las pensiones de Congresistas y asimilados, regidas por la Ley 4° de 1992, en virtud de la cosa juzgada constitucional establecida en la sentencia C-258 de 2013, pues conforme a la parte resolutive de la referida sentencia de control constitucional, *“las reglas sobre ingreso base de liquidación (IBL), aplicables a todos los beneficiarios de este régimen especial, son las contenidas en los artículos 21 y 36, inciso tercero, de la Ley 100 de 1993, según el caso”*.

Quiere insistir el Consejo de Estado en las razones que sustentan su postura tradicional con respecto al ingreso base de las pensiones del régimen de transición, y que ahora reitera:

- 1) La complejidad de los regímenes especiales pensionales, aplicables en virtud del régimen de transición, hace altamente razonable la interpretación que tradicionalmente ha tenido esta Corporación respecto de la expresión “monto” contenida como criterio general en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993.
- 2) Esta interpretación ha sido compartida en múltiples sentencia de constitucionalidad y de tutela de la Corte Constitucional, por lo cual el Consejo de Estado la ha aplicado en forma reiterada y pacífica. La variación interpretativa que pretende introducir la sentencia SU-230 de 2015, si se acogiera por el Consejo de Estado, afectaría el derecho a la igualdad de los ciudadanos beneficiarios del régimen de transición que tienen sus pensiones pendientes de decisiones judiciales o administrativas, y que constituyen un número significativamente menor de quienes se han beneficiado de la forma tradicional de liquidación, dada la inminente finalización del régimen de transición pensional. El principio constitucional de igualdad, en este caso se vería seriamente afectado en un aspecto cardinal de los derechos sociales como lo son las pensiones. Igual reflexión cabría sobre el impacto económico, que en todo caso ya se asumió para la generalidad de los pensionados, quedando muy pocos pendientes de esa decisión. Debe recordarse que el Acto Legislativo No. 1 de 2005, además de introducir el concepto de sostenibilidad financiera al sistema pensional, dispuso que el Estado “asumirá la deuda pensional que esté a su cargo”.
- 3) Los serios argumentos de desigualdad económica y social que sustentaron las decisiones de la sentencia C-258 de 2013, incluido el relativo al ingreso base de liquidación de las pensiones del régimen cuya constitucionalidad se definió en esa oportunidad, no pueden extenderse a las demás pensiones de los regímenes especiales del sector público que no tienen las características de excepcionales ni privilegiadas.
- 4) La Corte Constitucional no ha rechazado la postura del Consejo de Estado en este punto en forma expresa, en acciones de tutela en las que esta Corporación haya sido accionada, por lo cual la sentencia SU-230 de 2015 no le sería aplicable, dado que como tribunal supremo de lo contencioso administrativo, debería tener derecho, como mínimo a defender su posición en tales acciones. Cuando tal cosa suceda, es de esperar que la Corte Constitucional examine los argumentos aquí expuestos y debata a su interior el alcance de los mismos antes de pronunciarse sobre este importante tema.
- 5) Los principios de progresividad y no regresividad de los derechos sociales, que la misma Corte Constitucional ha estimado incorporados a la Constitución Política colombiana en virtud del llamado “bloque de constitucionalidad”, no se predicen exclusivamente de los cambios legales sino también de las variaciones jurisprudenciales. Si la interpretación tradicional del Consejo de Estado sobre el concepto de “monto” en las pensiones del régimen de transición del sector público se ha aplicado a la generalidad de los pensionados de dicho sector, tanto en sede administrativa como en las decisiones judiciales, y esa interpretación ha sido compartida por la Corte Constitucional en sentencias de constitucionalidad y de tutela, no parece acorde con los referidos principios de progresividad y no regresividad el cambio jurisprudencial que se pretende introducir con la sentencia SU-230 de 2015.

En efecto, si ya la Constitución dispuso la finalización del régimen de transición pensional y queda pendiente, en consecuencia, un volumen de reconocimientos pensionales mucho menor que el que ya tiene decidido el asunto conforme a la jurisprudencia del Consejo de Estado, no se ve ninguna afectación del principio de sostenibilidad financiera que imponga el cambio jurisprudencial que plantea la sentencia SU-

ALBERTO CARDENAS D. -ABOGADOS-
*Especialistas en Derecho Laboral y
Seguridad Social Integral*

Av. Calle 19 No 3 – 50 Oficina 2202 Edificio Barichara Tel. 3375605 / 3520788 – Bogotá D.C.

FACTORES SALARIALES

230 de 2015, y en cambio sí se hace notorio y protuberante el desconocimiento de los principios de igualdad y de progresividad.

IV. PRUEBAS

a. Documentales

1. Copia de la Cédula de Ciudadanía de mi poderdante.
2. Copia de la Resolución No. 679 del 24 de septiembre de 2007.
3. Copia de los factores salariales devengados por mi poderdante.
4. Copia del certificado de historia laboral de mi poderdante.
5. Copia de la solicitud de reliquidación de la pensión de fecha 07 de julio de 2016.
6. Poder debidamente diligenciado.

V. ANEXOS

Copias de la demanda y sus anexos, para sus correspondientes traslados a la entidad demandada y el Ministerio Público, la Agencia Nacional de Defensa Jurídica de la Nación y copia para el archivo del Despacho.

VI. EN CUANTO A LA CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL COMO REQUISITO DE PROCEDIBILIDAD DE LA ACCIÓN.

En tratándose de derechos de tracto sucesivo, no es procedente el requisito de la conciliación extra-judicial en los términos de la ley 1285 de Enero 22 de 2009, Ley 23 de 1991, y ley 460 de 2001, teniendo en cuenta que el derecho a una pensión, reajuste o reliquidación de la misma, son derechos ciertos, irrenunciables e imprescriptibles, que en principio no cabría esta figura jurídica, pues cualquier acuerdo podría ser inocuo al resultar trasgrediendo principios constitucionales mínimos, establecidos a favor de los trabajadores, como los que hace referencia el artículo 53 de la C.N.

El Honorable Consejo de Estado en sentencia del 10 de Junio de 2010 Rdo. Interno 2009 -113 – Apelación contra auto interlocutorio, MP. Dr. Víctor Hernando Alvarado Ardila, dijo lo siguiente:

“El asunto se contrae a establecer si la demanda presentada por el señor HENRY DELGADO TORRES, exige la conciliación extra judicial como requisito de procedibilidad establecido en la ley 1285 de 2009 (...).

(....)

Con el fin de decidir sobre el trámite de la conciliación extra judicial como requisito de procedibilidad, **es necesario precisar que son materia de conciliación los derechos que obtengan el carácter de “incierto y discutibles”**, autorizados por el artículo 53 de la Carta Política y los que hace referencia al ley estatutaria al establecer dicho requisito ..”Cuando los asuntos sean conciliables”.

Cuando se ha adquirido el derecho pensional por cumplir los requisitos establecidos en la ley, las partes involucradas en al eventual controversia judicial, **no están en posibilidad jurídica de conciliar tal derecho, ya que es de carácter imprescriptible e irrenunciable**, las condiciones para su otorgamiento están dadas por la ley, y ella no puede ser objeto de negociación, por ninguno de los extremos, por ser de orden público”.

Se concluye entonces que al conciliación extrajudicial como requisito de procedibilidad de la acción en estos casos es **IMPROCEDENTE**, por cuanto los derechos que se discuten en esta acción son ciertos, imprescriptibles e irrenunciables.

VII. COMPETENCIA Y CUANTÍA


Por la naturaleza de la acción, el origen de los actos acusados, el último lugar de prestación de servicio de mi poderdante y la cuantía que estimo en forma aritmética y razonada al momento de la presentación de la demanda, en virtud de lo dispuesto por el **art 155,156 y 157 de la Ley 1437 de 2011**. Conforme a lo establecido por el

ALBERTO CARDENAS D. -*ABOGADOS-*
Especialistas en Derecho Laboral y
Seguridad Social Integral

Av. Calle 19 No 3 – 50 Oficina 2202 Edificio Barichara Tel. 3375605 / 3520788 – Bogotá D.C.

FACTORES SALARIALES

artículo 206 del C.G.P declaro bajo gravedad de juramento que la cuantía se estima por: **OCHO MILLONES QUINCE MIL TRESCIENTOS TRECE PESOS MTCE (\$8.015.313)** DE ACUERDO A LA SIGUIENTE TABLA DE LIQUIDACIÓN.

LIQUIDACIÓN							
CONCEPTOS	2005			2006			TOTAL DÍAS
	DESDE	HASTA	DIAS	DESDE	HASTA	DIAS	
	16-nov.-2005	31/dic/2005	45	1-ene.-2006	15-nov.-2006	315	
Sueldo Básico Mensual		1.845.990,00			1.938.290,00		
Prima de Alimentación		0,00			0,00		
Auxilio de Transporte		0,00			0,00		
Prima de Escalafón		0,00			0,00		
Prima de Clima		0,00			0,00		
Prima de Grado		0,00			0,00		
Auxilio de Movilización		0,00			0,00		
Sobresueldo		0,00			0,00		
Otro concepto mensual		0,00			0,00		
Gastos de Representación		0,00			0,00		
Viáticos		0,00			0,00		
Prima Especial de Servicios		0,00			0,00		
Subtotal	=====>	\$ 1.845.990,00		=====>	\$ 1.938.290,00		
Prima de Navidad	999.326,00	83.277,17	11,98%	1.049.904,00	87.492,00	88,02%	
Prima de Junio							
Prima de Vacaciones	922.992,00	76.916,00		969.144,00	80.762,00		
Bonificación							
Prima de Servicios	922.992,00	76.916,00		969.144,00	80.762,00		
Otros pagos anuales	0,00			0,00			
Otros pagos anuales	0,00			0,00			
Subtotal	=====>	\$ 237.109,17		=====>	\$ 249.016,00		
Salario Mensual	=====>	\$ 2.083.099,17		=====>	\$ 2.187.306,00		
Salario Diario	=====>	\$ 69.436,64		=====>	\$ 72.910,20		
Devengado en el año	=====>	\$ 3.124.648,75		=====>	\$ 22.966.713,00		
Devengado Total en el Periodo . .		\$ 26.091.361,75					
Promedio Mensual		\$ 2.174.280,15					
V/R. Pensión Real 75 % . . \$		1.630.710,11					
V/R. Pensión Reconocida . . \$		1.444.872,00	Dif: . . \$	185.838,11			

RESUMEN LIQUIDACIÓN TOTAL									
Año	IPC	DESDE	HASTA	V/r. Pensión Reconocida	V/r- Real de Pensión	Diferencia	%Incremento Anual	Mesadas Adicionales	Total
					</				

ALBERTO CARDENAS D. -ABOGADOS-
*Especialistas en Derecho Laboral y
Seguridad Social Integral*

Av. Calle 19 No 3 – 50 Oficina 2202 Edificio Barichara Tel. 3375605 / 3520788 – Bogotá D.C.

FACTORES SALARIALES

VIII. NOTIFICACIONES

La demandada FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO, SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE TULUÁ , podrá ser notificada en la Carrera 25 No. 25-04 y al correo electrónico secducacion@tulua.gov.co.

El MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL puede ser notificado en la Calle 43 N° 57-14 CAN de la ciudad de Bogotá y al correo electrónico notificacionesjudiciales@mineducacion.gov.co.

La Agencia Nacional de Defensa Jurídica de la Nación a la Carrera 7 No. 75-66 pisos 2 y 3 de la ciudad de Bogotá D.C, y al correo electrónico procesos@defensajuridica.gov.co

Mi poderdante en la Calle 16 No. 28B -43, Barrio Popula, Tuluá, Valle del Cauca.

El suscrito puede ser notificado en la Calle 19 No. 3-50 Of. 2202, de Bogotá D.C y al correo electrónico albertocardenasabogados@yahoo.com.

Cordialmente,

ALBERTO CÁRDENAS D
C.C 11.299.893 de Girardot
T.P 50.746 del Consejo Superior de la Judicatura.
Sustanció: LMLF